

En atención a que el Congreso que deberá conocer del proyecto de Ley de Minas introducido para su discusión en la Cámara del Senado, está integrado por representantes elegidos por el pueblo y, por tanto, obligado a dotar al país de los instrumentos legales que lo enrumben definitivamente hacia la consolidación de su independencia económica y política, es pertinente establecer que las observaciones que se elaboren a ese proyecto deben referirse al fondo de la materia con preferencia a las deficiencias de forma. Ningún beneficio aportaría a la República que so-pretexto de "sencillez", de "mejor redacción", etc se promulgara una ley que consagrara disposiciones que han venido obstaculizando el mejor aprovechamiento por la colectividad de los recursos de que dispone la Nación. La Ley de Minas es precisamente importante a este respecto.

1.- El proyecto en cuestión, siguiendo la pauta de las anteriores leyes, se abstiene de definir categóricamente a quien pertenece las minas, dejando subsistir la ambigüedad de si a los Estados o a la Nación, con las consiguientes modalidades que coartan el pleno ejercicio por la Nación de su derecho indiscutido y que han dado origen a no pocos perjuicios irreparables. Por otra parte, insiste el proyecto en dividir los recursos naturales no-renovables en minerales y no-minerales, ratificando en su Art 3 la propiedad sobre los últimos al propietario del suelo en que se encuentren, aunque con limitaciones tal como la establecida en el párrafo primero del mismo artículo, que implica una innovación con respecto a la Ley vigente.

De acuerdo con la ciencia y técnica modernas y los intereses permanentes de la colectividad, esa división es anacrónica, pues en el desarrollo industrial cada vez se usan en mayor proporción recursos no-minerales cuya conservación y administración por el Estado es de más imperiosa necesidad que muchos de los llamados minerales.

En consecuencia creemos que el Congreso debería declarar que tanto las minas como los recursos no-minerales —en una sola expresión: los recursos naturales no-renovables— existentes en el suelo y en el sub-suelo son propiedad de la Nación. En esa forma no sólo quedaría resuelta definitivamente a favor de la Nación, sin posibles ambiguas interpretaciones, su propiedad sobre los "depósitos y emanaciones de vapores naturales de agua o de cualquier otro mineral, que constituyan fuentes de energía", propiedad que ya se le discute so-pretexto de que esos vapores no son científicamente clasificables como minerales, sino también la propiedad sobre las corrientes de agua subterráneas y sobre otros y muy numerosos recursos que, cuales el "talco, la magnesita, el caolín, el yeso", etc, por encontrarse en el suelo, en la superficie, se atribuyen en propiedad al propietario del suelo.

Para 1829, año del Decreto del Libertador sobre propiedad de las minas, sub-suelo y minerales eran sinónimos y limitado el alcance del concepto porque se desconocía la

mayor riqueza que representaba el caolín, por ejemplo, con respecto a ciertas piedras preciosas. Hoy sabemos que en el sub-suelo existen además de los minerales otros recursos no-renovables, así como en el suelo, que por deber ser aprovechados por la colectividad no pueden seguir siendo objeto de apropiación particular.

Esa declaración como artículo primero de la ley, permitiría, al desarrollar ésta, eliminar la serie de conflictos a que ha dado lugar la coexistencia de los dos sistemas de propiedad: la nacional y la particular. Propietaria la Nación de los recursos no-renovables, en pleno derecho podrá reservar para sí, cuando los intereses generales lo determinen, no sólo la exploración, explotación y distribución de los mismos, independientemente de qué se encuentren o no en suelo de propiedad particular, sino proceder a su explotación directa. Como derivación de ese derecho, ejercería la Nación, por intermedio del Estado, el de otorgar concesiones de exploración o explotación, o ambas a la vez, sobre aquellos recursos sobre los cuales no se haya reservado o se reserve la exclusividad de explotación. La figura del denunciante como derecho adquirido de los particulares y los conflictos que ha originado, quedarían a su vez eliminados. En cuanto al derecho de propiedad que la ley vigente y las anteriores atribuían al propietario del suelo sobre los recursos no-minerales, la fijación de un plazo -un año- para que el propietario comience la explotación de los mismos llenando los requisitos que se establezcan para el otorgamiento de concesiones de explotación, estaría de acuerdo a la tradicional declaración de utilidad pública con respecto a todo lo que concierne a la explotación de recursos naturales.

Estos diversos aspectos creemos podrían ser concretados en los siguientes artículos:

Art 1.-Los recursos naturales no-renovables existentes en el suelo y sub-suelo de su territorio y en el lecho y sub-suelo de su plataforma continental, son propiedad de la Nación -(tales como las minas, comprendidas en ellas: los criaderos, depósitos, mantos, vetas, filones, o yacimientos de minerales o de sustancias cuya naturaleza sea distinta a los componentes de los terrenos; los minerales de los cuales se extraigan metales o metaloides, los minerales radio-activos; las piedras preciosas, las calizas, caolín, magnesita y yeso; los combustibles minerales sólidos, el petróleo, el gas natural y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; así como las salinas y los ostrales de perlas)-.

Art 2.-Estos recursos naturales no-renovables son inalienables e imprescriptibles y con la excepción del petróleo, del gas natural y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, de los depósitos de minerales ferrosos y de aluminio, de los radio-activos, sobre los cuales en lo adelante se reserva la Nación la exclusividad de su explotación y distribución, sólo podrán otorgar-

se concesiones por el Ejecutivo Nacional a los particulares y sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes venezolanas, con la condición de que se comiencen trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trate en los plazos que fijen las respectivas leyes y se cumplan los requisitos que prevengan las mismas. El Estado podrá declarar extinguidas las concesiones ya otorgadas, en la forma que se establezca en esta y en las leyes especiales, para explotarlas directamente, otorgarlas en nuevas concesiones o incorporarlas a sus reservas, cuando dejen de ser explotadas durante un período que esta y demás leyes especiales fijen o cuando el concesionario no cumpla las disposiciones que sobre conservación de los mismos esta y demás leyes especiales establezcan.

**Párrafo único:** Los propietarios de fundos en los cuales existan recursos naturales no-renovables de los que hasta ahora han venido siendo considerados como no-minerales, dentro de un año a partir de la publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y siempre que no los estén ya explotando conforme a las disposiciones legales al respecto, tendrán derecho, con prioridad a cualquier otro solicitante, a que se les otorguen las respectivas concesiones de explotación de los mismos si para el efecto llenan los requisitos que en esta Ley se establecen.

**Art 3.-** Todo lo concerniente a <sup>explotación</sup> explotación, comercio y distribución de los recursos naturales no-renovables cuya explotación no haya sido reservada por la Nación o que sean objeto de leyes especiales relativas a determinadas sustancias, se regirá por la presente Ley.

**Art 4.-** Se declaran de utilidad pública todas las actividades relativas a <sup>explotación</sup> la explotación, comercio y distribución de los recursos naturales no-renovables.

**Art 5.-** Todo lo concerniente a la explotación de petróleo, asfalto, gas natural y demás hidrocarburos que se lleva a cabo conforme a ~~leyes especiales~~ <sup>leyes especiales</sup> con anterioridad a esta Ley, continuará rigiéndose por la Ley especial de Hidrocarburos.

**Art 6.-** Los yacimientos de sal gema, las salinas, salinetas y demás yacimientos de sales halógenas, se regirán por las disposiciones de la Ley de Salinas.  
etc....etc.....etc....

Interpretando estos principios generales, la nueva ley podría ser redactada siguiendo la distribución de materias y el articulado de la vigente en lo que fuere aprovechable, pero concretándose a las relaciones del Estado con los concesionarios -régimen de concesiones-, cuidando siempre el mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y una cada vez mayor participación de la Nación en la explotación de los

mismos, participación que debería fijarse en cada caso tomando en cuenta el tenor del mineral, los precios internacionales y la ubicación de los recursos, etc.

2.- Respecto a las observaciones de forma, el proyecto se caracteriza por la incoherencia de su ordenamiento y la imprecisión en su articulado. La claridad no se obtiene reduciendo al mínimo la redacción de los artículos. Por el contrario, las leyes deben más bien abundar en explicaciones a fin de impedir que su espíritu y razón sean tergiversados por quienes las apliquen. En la forma como está redactado el Art 1, no se resume en él, como se asienta en la Exposición de Motivos, todo el contenido jurídico de los artículos 1, 2, 3, 5 de la vigente Ley, lo que anotamos solo como ejemplo, pues no es nuestra intención entrar en detalles.

Si quisiéramos no dejar de llamar la atención sobre el hecho de que en el proyecto se persiste en introducir disposiciones que podrían ser consideradas como anticipos a una posible derogación del Decreto por el cual fueron reservadas para la Nación la exploración y explotación de los minerales radio-activos, medida que se inspiró en los altos intereses de la Defensa Nacional por una parte, dada la importancia estratégica de esos minerales y de los intereses generales, por la otra, dado el valor comercial que esos minerales tienen en el mercado internacional y que cada vez serán mayores por tratarse de fuentes de energía. Pues bien, el Art 27, que es una reproducción del 32 de la vigente Ley con algunas modificaciones, se le agregó significativamente lo siguiente: "Cuando se trate de minerales radio-activos, el Ejecutivo Nacional podrá elevar la expresada participación a dos por ciento". Luego en el Título V, De los Impuestos y Exoneraciones, en el Art 52 se establece en la norma 3a: "El cinco por ciento del valor comercial en boca de mina, cuando se trate de minerales radio-activos". Es claro que para los proyectistas los minerales radio-activos deberían regresar a ser objeto de concesiones a particulares nacionales y extranjeros, lo que creemos atentatorio a los intereses permanentes de la Nación.

Así mismo en el Art 55 se observa otra "innovación" que llama la atención por la previsión que implica, dada la fecha en que <sup>fué</sup> elaborado el proyecto, y que consiste en extender la exoneración de derechos de importación... "a quienes emprendieren la instalación de plantas de beneficio para el tratamiento de minerales nacionales o PROVENIENTES DE PAISES EXTRANJEROS". Salvo el aluminio ¿qué otro mineral podría ser importado para ser reducido en el país aprovechando la energía eléctrica barata del Caroní? ¿Qué relación tiene esa innovación con el Decreto de agosto 1958 cuya derogación por el Ejecutivo Nacional ha sido anunciada en estos días y que también se refería al aluminio?

Por la importancia que atribuimos al fondo de la materia, nos abstenemos de abundar en observaciones de forma.

Salvador de la Plaza

Caracas, febrero 9 de 1960.